

Dossier: Los '70

La historia negra de Federación Agraria Argentina

La intervención política de los 'chacareros' entre Onganía y
Videla (1966-1976)

Gonzalo Sanz Cerbino

IEALC-CONICET

Resumen

Federación Agraria Argentina, corporación que expresa los intereses de la burguesía agropecuaria de menor tamaño, ha sabido construir una imagen "progresista", que la presenta como defensora de intereses populares, aliada de la clase obrera y en las antípodas de una "oligarquía" liberal y golpista. En este artículo abordaremos las posiciones asumidas por la entidad en el período 1966-1976, en la que, entre otras cosas, apoyó golpes de estado, clamó por la represión hacia el movimiento obrero y trazó alianzas con los representantes de la burguesía rural de mayor tamaño. Esperamos, de esta manera, contribuir a la construcción de una historia de la corporación despojada de mitos.

Palabras Clave: Federación Agraria Argentina - Burguesía Agraria - Golpes de Estado

Abstract

Federación Agraria Argentina, a corporation that expresses the smallest agrarian bourgeoisie interests, has made an image of itself as a politically progressive force, that shows it as a defender of popular interest, an allied of working class and in the opposite of the so called liberal oligarchy. In this paper, we analyze the positions assumed by this entity during 1966-1976 when, between other facts, it supported several coup d'état, claimed for repression of workers movement and made alliances whit the biggest fractions of rural bourgeoisie. In this way, we expect to contribute to the build a mythless history of this corporation.

Keywords: Federación Agraria Argentina - Rural Bourgeoisie - Coup d'état

Un hecho político reciente despertó el interés de los investigadores sociales respecto al accionar político de las corporaciones agropecuarias pampeanas en la Argentina. Nos referimos al conflicto que las enfrentó con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por el aumento de las retenciones en 2008. Este hecho, a su vez, dio lugar a interrogantes y polémicas respecto a la confluencia de Federación Agraria, representante de la burguesía rural de menor tamaño, con la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que expresaban los intereses de la gran burguesía terrateniente. Sin duda, el planteo del problema es deudor de aquellas construcciones míticas que idealizaron a los chacareros y los ubicaron en la vereda opuesta de la “oligarquía”. Estos esquemas opusieron una corporación supuestamente identificada con valores democráticos, intereses populares y planteos reformistas (FAA), a entidades asociadas a planteos reaccionarios e impopulares, como SRA o CARBAP.¹ En este artículo, nos proponemos revisar y discutir estos esquemas a la luz de la reconstrucción de accionar político de estas corporaciones en las décadas de 1960 y 1970.

Chicos y grandes con Onganía

El golpe de Onganía constituyó un intento más de la burguesía argentina de poner fin a una crisis que se arrastraba desde mediados de los '50. Una crisis de acumulación cuyas raíces se encontraban en los límites de la renta agraria para seguir como sostén de la acumulación de capital como hasta entonces. Las divisiones en la clase dominante, y la resistencia de los explotados a convertirse en variable de ajuste, comenzaron a minar las bases de la dominación social, y eso

¹Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, integrada a CRA.

se manifestó en la sucesión de crisis, a nivel de gobierno y de régimen. La presidencia de Illia no pudo imponer una salida y rápidamente se vio flanqueada por las fuerzas enfrentadas, que comenzaron a operar a favor del golpe. Acosado por una clase obrera organizada en torno a la CGT, dominada por el peronismo, dispuesta a defender sus conquistas y el valor de la fuerza de trabajo, por un lado. Por el otro, por corporaciones empresarias que demandaban orden y disciplina, pero sobre todo, poner en caja a los sindicatos. Illia osciló entre uno y otro polo sin conformar a nadie.

La CGT recibió al nuevo gobierno poniendo de relieve su ilegitimidad emanada de la proscripción del partido mayoritario, y desplegando la segunda etapa de su Plan de Lucha votado en 1963. Éste contemplaba la toma escalonada de establecimientos fabriles, que se desplegó entre mayo y junio de 1964, movilizándolo a casi cuatro millones de obreros. A pesar de condenar las acciones, el gobierno no dispuso el desalojo por la fuerza, sino que recurrió a la poco efectiva vía judicial, que encrespó los ánimos de la burguesía. Los conflictos continuaron a lo largo de 1965 y 1966, con paros parciales y generales, ocupaciones aisladas y algunos enfrentamientos localizados con fuerzas del orden. Por su parte, las cámaras empresarias presenciaron alarmadas, no solo el despliegue de poder sindical, sino la actitud del gobierno, que juzgaban permisiva. Demandaron abiertamente que se doblegara a los sindicatos, se pusiera orden y se garantizaran condiciones estables de acumulación. Más allá de que las demandas gremiales no superaran los límites capitalistas, su presencia constituía una amenaza. La necesidad de sanear la economía exigía disciplinar a la clase obrera y, a su vez, existía el temor a que las bases desbordaran por izquierda a la dirigencia peronista. Todo confluía en un único reclamo: restablecer el orden. Y eran los elencos militares los depositarios de tal demanda.

A mediados de los '60, una serie de conflictos enfrentaban entre sí a las diferentes capas de la burguesía agropecuaria. En primer lugar, la segmentación de la carga impositiva: los más chicos pretendían, mediante una serie de instrumentos como el impuesto a la renta potencial, que los grandes tributaran proporcionalmente más. En segundo lugar, la cuestión de los arrendamientos, congelados desde principios de los '40. Este último problema se encontraba en el centro del debate desde el golpe del '55, momento en el que comenzó a discutirse la liberación del mercado de arriendos, que, según cómo se la instrumentara, podía derivar en el acceso a la tierra o el desalojo masivo de los arrendatarios. De estos conflictos se nutría una división que ubicaba, de un lado, a la burguesía terrateniente de mayor tamaño, representada por

CARBAP y SRA.² Y del otro, a la burguesía pequeña, propietaria y no propietaria, y al cooperativismo, representadas por Federación Agraria y CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria).³

Sin embargo, en los meses previos al golpe del '66 tendieron a primar las coincidencias entre ambos bloques. Algunos elementos estructurales habilitaban la confluencia: el acceso a la tierra de buena parte de los socios de FAA y el aumento de la escala merced a la unión en cooperativas y los procesos de concentración.⁴ Así, la coyuntura encontró a la Sociedad Rural y a Federación Agraria actuando juntas. Uno de los reclamos en los que coincidieron fue la disminución de la presión gubernamental sobre la renta agraria. Los ruralistas, de conjunto, exigieron la rebaja de los impuestos sobre el sector y una devaluación que restableciera sus ingresos. Consecuentemente, exigieron un recorte en los gastos estatales, que se financiaban con las transferencias de renta, lo que implicaba despidos en la administración pública, menor gasto social y menos transferencias a la burguesía industrial que se traducirían en cierres de plantas y aumento del desempleo. Estas demandas, profundamente impopulares, no sorprenden en boca de CARBAP o SRA, pero pocos saben que FAA compartía estas posiciones asociadas al "liberalismo". Así lo expresaba una editorial de su periódico oficial a comienzos de 1966:

"Se continúa cargando al agro con el peso de presupuestos siderales para seguir manteniendo una burocracia frondosa e inoperante, que se aferra a su permanencia en cargos oficiosos e inútiles para la comunidad y que aumenta en número cada vez que se aproxima una contienda electoral, sin percatarnos del tremendo mal que le ocasionamos a la democracia."⁵

²CARBAP nucleaba a la burguesía terrateniente mediana y grande del corazón de la Región Pampeana. SRA a la burguesía terrateniente de mayor tamaño, centralmente en la pampa húmeda.

³Federación Agraria Argentina (FAA) había nucleado históricamente a la burguesía agropecuaria de menor tamaño, terrateniente y arrendataria, aunque desde la década del '50 los arrendatarios habían perdido peso en su seno, y sus socios aumentaban su escala. CONINAGRO, cuya dirección se encontraba vinculada a FAA, nucleaba a la burguesía agropecuaria asociada en cooperativas, en un intento de aumentar la escala productiva por la vía del asociacionismo.

⁴Estos procesos han sido documentados por una profusa bibliografía, en la que se destaca Barsky, Osvaldo y Alfredo Pucciarelli: "Cambios en el tamaño y en el régimen de tenencia de las explotaciones agropecuarias pampeanas", en Barsky, Osvaldo (Ed.): *El desarrollo agropecuario pampeano*, GEL, Buenos Aires, 1991.

⁵*La Tierra*, 25/1/1966.

Pero no era esta la única demanda con que FAA y sus aliados de la “oligarquía” pretendía avanzar sobre los intereses de la clase obrera. El problema de los “bajos” ingresos del sector rural fue relacionado también con la política laboral de Illia, que las entidades rurales juzgaban “populista”. Una serie de huelgas en el sur santafesino a comienzos de 1966, que reconocían antecedentes en las cosechas de 1964 y 1965, pusieron de manifiesto la posición anti-obrera de FAA y sus aliados. Ante la aparición de los primeros conflictos, el presidente de FAA se reunió con el gobernador provincial para demandar una solución al “proceso de distorsión que se viene advirtiendo en las relaciones laborales que [...] se genera en las explotaciones agropecuarias en oportunidad de las cosechas.” Reclamaron de las autoridades locales “una actitud firme frente a los alzamientos que contra las disposiciones [oficiales] se vienen sucediendo en los departamentos del sur de la provincia.” Es decir, en un reclamo que poco tenía de “popular”, exigieron reprimir las huelgas de peones. El gobernador se comprometió a hacer cumplir lo dispuesto, impidiendo “la actividad de perturbadores”.⁶ FAA cargó con fuerza contra los obreros rurales y sus dirigentes sindicales, para finalizar demandando una respuesta represiva del Estado. No se privaron de agitar el fantasma del comunismo, que estaría detrás de las huelgas, ni de denunciar la “pasividad” oficial que permitiría tales desbordes:

“Allí, un falso sindicalismo obrero en el que se escudan algunos conocidos extremistas de izquierda, al servicio de intereses internacionales que pretenden subvertir el orden y la paz en el mundo, aprovechan la pasividad asombrosa de las autoridades para, con sus pretensiones desmedidas y en el momento más propicio, repartir el resultado de una explotación agraria entre quienes no tuvieron ninguna participación anterior y por ende no corrieron ningún riesgo.

Así como suena: un grupo de malos obreros rurales viene repartiendo un botín que no les pertenece, a vista y paciencia de las autoridades nacionales y provinciales, pese a todas las denuncias que [...] se vienen realizando [...]”⁷

La nota continuaba con la descalificación a la organización sindical, un puñado de “agitadores profesionales” que vivía “a expensas de los mismos obreros o, a lo mejor, pagados por algún comité inter-nacional.” Detrás de lo que se presentaba como demandas legítimas,

⁶La Tierra, 4/3/1966.

⁷Ídem.

ocultarían “sus oscuros designios de confundir y engendrar el caos, para desencadenar el desorden institucional y así servir a sus amos foráneos, materialistas y ateos”. A su vez, el reclamo sería desmedido: los peones exigirían “salarios abusivos” y “disparatados”. Aunque era cierto que los salarios habían comenzado a ascender con las huelgas, en 1964, no habían hecho más que recuperar la caída que experimentaron con el Plan de Estabilización implementado en 1958 por Frondizi, de la mano de una fuerte represión. La posición de FAA poco tenía para envidiar a la de SRA, que descalificó a los obreros por reclamar “salarios exorbitantes” y llamó a contener los “violentos” métodos sindicales, denunciando la “invasión” a mano armada de campos, el “secuestro” de personal y la “intimidación” para garantizar el paro. A su vez, como Federación Agraria, denunció “la pasividad de las autoridades provinciales.”⁸ Cabe aclarar que estos hechos, denunciados por SRA y otras corporaciones, fueron negados rotundamente por el gobernador de Santa Fe, quien acusó a esta entidad de promover “los rumores más descabellados tendientes a lesionar la estabilidad institucional de la República.”⁹ Fue respaldado por la dirigencia sindical, que señaló que los empresarios “magnificaban” el conflicto para exigir una “enérgica represión.”¹⁰ SRA continuó su diatriba contra los gremios, ubicando el hecho en el contexto de la ofensiva de la CGT, a la que relacionó con un “plan subversivo”:

“La situación imperante en el sur de Santa Fe se suma así, a la ola de paros, huelgas, delitos y otros hechos similares que afectan a todo el país y tuvieron comienzo con el ‘Plan de Lucha’ ejecutado por la CGT con el objeto extra-gremial de lograr un ‘cambio de estructuras’ [...] La indisciplina y la negación de las jerarquías se ha entronizado en todos los lugares de trabajo, como consecuencia de la debilidad con que se procede y de la pérdida del principio de autoridad que es imprescindible restablecer para que impere nuevamente el orden sin el cual la República no podrá recuperarse de la crisis moral y material que la afecta.

Este estado de cosas cada día más alarmante por su creciente gravedad, es el resultado de un plan subversivo que pretende sumir en el caos al país, para imponernos un régimen extremista, contrario a la idiosincrasia y el sentir nacional.”¹¹

⁸SRA: *Memoria de la Sociedad Rural Argentina 1965-1966*, p. 72.

⁹Íbid., p. 74.

¹⁰*La Nación*, 11/4/1966.

¹¹SRA: *Memoria de la Sociedad Rural Argentina 1965-1966*, p. 72.

Así se imponía el reclamo de orden en las filas de la clase dominante, que la intervención militar vino a aplacar. No es extraño, entonces, que los patrones recibieran a Onganía de la mejor manera. Las primeras medidas del gobierno de facto comulgaron con el objetivo de reestablecer la disciplina: se disolvieron los partidos políticos y el parlamento, y se intervinieron las universidades, único foco opositor. Las corporaciones empresarias respaldaron abiertamente el golpe que habían impulsado. A nadie sorprende esta actitud de parte de SRA o CARBAP, pero sí de FAA, a la que a algunos autores adjudican una inexistente “vocación democrática”.¹² Esta corporación respaldó la “racionalización” estatal y el despido de empleados públicos, y si filtró alguna crítica fue que no se avanzaba a fondo en este sentido. Saludó la represión que siguió a la huelga portuaria, reacción a la reestructuración que avanzaba sobre el régimen laboral, y también la *pax militar* que disuadió, por primera vez en tres años, los conflictos sindicales en la cosecha santafesina. No solo eso: exigieron que el gobierno profundice el “saneamiento” de las finanzas públicas y criticaron por “populista” toda disposición, por mínima que sea, en favor de los obreros. Incluso apoyaron, de la mano de la Sociedad Rural y CARBAP, el arribo de Krieger Vasena, precedido por un fuerte avance represivo contra la CGT y el Vandorismo. Aunque con reticencias, aceptaron el restablecimiento de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, pero exigieron que ese “sacrificio” fuera puesto al servicio de una reestructuración productiva. Para ello había que avanzar con mayor fuerza en la eliminación de las “industrias artificiales” subvencionadas por el erario público, reducir el déficit fiscal, eliminar a la “burocracia” de la administración pública y al “personal sobrante” en las empresas estatales. Todo avalado por el clima represivo impuesto por el gobierno de facto, sin el que difícilmente se podría haber avanzado en los reclamos de la burguesía terrateniente agropecuaria grande y chica. De esta manera, se aseguraban que, a mediano plazo, la exacción estatal de renta fuera disminuyendo y, de esta forma, “restablecer el ingreso agropecuario”.

¹²Entre otros Palomino, Mirta: *Tradición y Poder: La Sociedad Rural Argentina (1955-1983)*, CISEA-GEL, Buenos Aires, 1988 y Martínez Nogueira, Roberto: “Las organizaciones corporativas del sector agropecuario. Notas para un ensayo interpretativo de sus comportamientos”, *Documento N° 10*, CISEA, Buenos Aires, 1985.

La primera Comisión de Enlace

La “luna de miel” con las autoridades militares no se extendió más allá de la segunda mitad de 1967. La instauración de las retenciones a comienzos de ese año, que anulaban los beneficios obtenidos por el sector gracias a la devaluación, fue el primer escollo en la relación. A pesar de que en principio se las aceptó a cambio de profundizar el avance en el recorte del gasto público y las transferencias hacia la industria, su mantenimiento en el tiempo fue minando la confianza en ese personal político que otrora habían impulsado. El deterioro se profundizó con nuevas medidas que apuntaban a aumentar el peso de la contribución del agro al sostenimiento de la economía. Una de ellas, cuestionada por igual por grandes y chicos, fue el impuesto de emergencia a las tierras aptas. Más adelante se sumaron los controles de precios en los productos de la canasta básica (carne, leche y pan) como medida para contener la inflación, que imponían un nuevo recorte a los ingresos agropecuarios. El paso del tiempo dejaba cada vez más claro que, más allá de los conflictos ideológicos entre “liberales” y “populistas”, ningún gobierno podía renunciar al elemento que sostenía en buena medida el funcionamiento de la economía argentina: la renta agraria. Y contra ello batallaban las corporaciones agropecuarias, en una lucha que aunaba a chicos y grandes: eliminar por completo las transferencias de ingresos del agro a la industria urbana y el proletariado, aún a costa de la reducción de salarios y la desocupación de masas, la privatización de empresas públicas o la quiebra masiva de establecimientos fabriles. He aquí el programa de la burguesía terrateniente agraria, que comenzó a expresarse en la intervención conjunta de Federación Agraria, Sociedad Rural, CRA y CONINAGRO durante el período.

Desde 1968, la oposición a las retenciones, los impuestos y los controles de precios (todas medidas que apuntaban a reasignar renta agraria) fue soldando una unidad en la acción de las distintas capas de la burguesía terrateniente agropecuaria, que se expresó en una serie de encuentros y pronunciamientos comunes. La crisis política abierta con el Cordobazo en 1969, que comenzó a bifurcar los caminos de la política, no hizo mella en la senda unitaria que comenzaba a recorrer la burguesía rural. La defensa unitaria frente a los intentos de apropiación de la renta agraria siguió primando frente a otras determinaciones de la coyuntura política, como el ascenso de la alianza reformista o la creciente conflictividad social. Este elemento llevaba a una confluencia cada vez más marcada de las corporaciones del campo.

La intervención de las corporaciones no se limitó a denunciar la situación imperante, sino que comenzó a desarrollarse, hacia 1970, un incipiente proceso de movilización de las bases. El primer impulso partió de FAA, que en marzo lanzó un Plan de Acción Gremial, consistente en una serie de actos y asambleas para denunciar la “crisis del campo” en distintos puntos del país. Una decena de concentraciones se realizaron en los meses subsiguientes en Buenos Aires y Córdoba, en donde centenares de productores hicieron oír su descontento. Hacia agosto de 1970, corporaciones otrora rivales comenzaron a confluir en asambleas conjuntas.¹³ Este hecho ponía sobre la mesa que la confluencia de las direcciones, que ya se había manifestado en varios comunicados y declaraciones conjuntas, expresaba una tendencia que emanaba de las bases. En estas asambleas se realizaron múltiples llamados a la unidad del agro para enfrentar la política del gobierno, e incluso se llegó a interpelar a los dirigentes instándolos a llamar a un congreso que resolviera la unificación.

Estas tendencias finalmente derivaron en el llamado a una asamblea nacional conjunta convocada por SRA, FAA, CONINAGRO y CRA, a realizarse el 26 y 27 de octubre en Rosario. Para la preparación del encuentro nacional, se decidió impulsar una serie de asambleas regionales en distintos puntos del país, como Bahía Blanca y Rosario.¹⁴ Se proyectaba a su vez que, luego de las deliberaciones de la denominada Primera Reunión Nacional de Entidades Agropecuarias, una comisión especialmente designada que se abocaría a la redacción de las conclusiones de la asamblea. Un verdadero programa común, que sería presentado y refrendado en una nueva asamblea nacional.¹⁵

El documento fue presentado y aprobado en un multitudinario acto realizado el 17 de noviembre de 1970 en el local de la Sociedad Rural en Palermo, Capital Federal. Allí se dieron cita 10.000 productores de diferentes puntos del país, que, además de refrendar el programa, votaron la constitución de la Comisión de Enlace, un frente conformado por las cuatro entidades que impulsaron el encuentro.¹⁶ El documento se iniciaba con un balance general (negativo) de la situación económica, política y social del país, cuyo estancamiento se atribuía

¹³Ver por ejemplo, la asamblea del 8 de agosto de 1970 en Tres Arroyos (*La Nación*, 9/8/1970), o las de América y Rivadavia en septiembre (*La Tierra*, 17/9/1970; *La Nación*, 27/9/1970), convocadas por CARBAP y FAA entre otras.

¹⁴*La Nación*, 17/10/1970.

¹⁵*La Nación*, 26/10/1970.

¹⁶*La Nación*, 18 y 19/11/1968.

a la desidia expresada por los distintos gobiernos frente a la cuestión agraria. Señalaba que la evolución económica y social de la Argentina, especialmente desde la posguerra, no resultaba satisfactoria para ningún sector social. Ello sería el resultado de un grave error en la concepción del desarrollo y de la aplicación de políticas que, en todos los casos, habían contribuido a deteriorar progresivamente al sector agropecuario, estrangulando sus ingresos. Esto llevó al estancamiento del agro, que a su vez era la causa del estancamiento nacional. Esta concepción errada del desarrollo nacional se basaba en el criterio de que éste podría alcanzarse “mediante un fuerte proteccionismo, que posibilitara un rápido proceso de sustitución de importaciones”. Este diagnóstico, basado en la experiencia que siguió a la crisis del ‘30 debió haber sido revisado en los años subsiguientes, y en particular a partir de la última posguerra. Por el contrario, la política económica argentina siguió fundada en tales concepciones:

“En base a ellos, se protegió al desarrollo industrial con aranceles que llegaron a significar efectivas prohibiciones para la importación. Al amparo de dicha protección, se desarrollaron algunas industrias con niveles de eficiencia relativamente bajos en comparación con los internacionales y con notorios defectos en el orden de la dimensión de las empresas.

Por su parte, por las razones apuntadas, se deprimieron las posibilidades de exportación, mediante la aplicación de tipos de cambio desfavorables o la imposición de altos tributos. Estas medidas, tenían un efecto indirecto de subsidio al consumo y al desarrollo industrial, mediante la artificial depresión de los precios de los productos agrarios.”¹⁷

A pesar de la sucesión de gobiernos de distintos signos políticos, el esquema se mantuvo, a excepción de períodos cortos que no modificaron la tendencia. Destacaban que su objeción no era hacia la industria en general, sino a la “falta de racionalidad en la concepción de la política industrial, así como los instrumentos puestos en ejecución para concretarla”.¹⁸ En este mismo sentido, se objetaba el alto costo de los insumos agropecuarios, derivados de niveles de protección “irracionales” que condenaban al sector a pagar precios por encima de los internacionales, subsidiando la industria nacional. Exigían que esas industrias vayan adquiriendo una “capacidad competitiva que produzca la

¹⁷CRA, SRA, FAA, CCEA y CONINAGRO: “El agro y el desarrollo nacional. Conclusiones”, Buenos Aires, 17 de noviembre de 1970.

¹⁸Ídem.

liberación de recursos actualmente transferidos por el agro como subsidios”. Que el Estado, mediante la aplicación de herramientas promocionales (como el crédito o los impuestos) obligara a la modernización de estos sectores, “desechando una estrategia de simple e irracional transferencia de ingresos”.

Durante los cuatro años de la Revolución Argentina, sostenía el documento, se deprimieron los ingresos del agro a fin de lograr una estabilidad que no se consiguió. El Estado absorbía un tercio del PBI con el agravante de una deficiente devolución en obras y servicios para la comunidad. A esto se agregaba la ineficiencia de las empresas estatales:

“...en lugar de reducir el gasto público, se lo ha aumentado con nuevos organismos burocráticos y nuevas aventuras de empresario que, en última instancia, siempre pagan los sectores productivos más eficientes de la población”.

La reducción del gasto público debía ser el eje de toda política de estabilización, para liberar recursos de los sectores improductivos hacia los más productivos (especialmente el agro), lo que generaría un verdadero desarrollo económico. En consonancia, se expresó una fuerte crítica a la política fiscal, señalando que no debía tener una finalidad recaudadora como hasta ahora, sino estimular una mayor producción y productividad. Demandaban una profunda reforma fiscal, discutida con los productores, que además de simplificar y evitar superposiciones de cargas, generara estímulos a la producción. En concreto, exigieron la eliminación del impuesto a las tierras aptas y las retenciones, aumento de los mínimos no imponibles y deducciones en réditos, entre otras cuestiones que apuntaban en la misma dirección: reducir sustancialmente la carga fiscal sobre la producción agropecuaria.

Señalaron también que cualquier política de estabilización estaba condenada al fracaso si no se apoyaba en exportaciones crecientes que alejaran el peligro de la crisis de balanza de pagos. Esto implicaba una mayor producción de aquellos bienes que la Argentina elaboraba a costos internacionales, y que podía colocar en mayores cantidades en el mercado mundial. Casi en su totalidad, este tipo de productos eran agropecuarios. Y la única forma de conseguir estas metas era estimular al sector, por ello pedían elevar sus precios relativos: “siendo el precio el incentivo inmediato de toda actividad económica, lo lógico es que para obtener una mayor producción agropecuaria exportable, deban mejorarse los precios relativos de dichos productos.” Sin mejores ingresos,

no habría estímulo a la inversión y a la incorporación de tecnología que permitiera elevar la producción.

Hasta el momento, señalaban, se había hecho todo lo contrario: el agro habría llegado a una situación de gran deterioro por las políticas aplicadas. Se referían particularmente a la política cambiaria y las retenciones, que impedían al agro vender sus productos a precios internacionales, y por las cuales el Estado obtenía una masa de renta que destinaba a subsidiar el entramado industrial. El reclamo también apuntaba a los controles de precios, que contenían los efectos de la inflación sobre los bienes-salario, oficiando como subsidio al consumo de las masas. Demandaban, por tanto, una política de desarrollo agropecuario, basada en la rentabilidad de las explotaciones y la participación de las entidades en su elaboración.

Este programa sintetizaba los planteos que las cuatro entidades venían expresando desde hacía por lo menos cuatro años. El corazón del mismo era la defensa de la renta agraria frente a la apropiación por otros sectores. En su concepción, una política que sustrajera parte de los ingresos del agro para destinarlos a subsidiar el desarrollo industrial o el consumo de las masas urbanas, terminaba liquidando al único sector capaz de impulsar el desarrollo nacional, condenándolo al estancamiento y con él, a todo el país. La política que postulaban apuntaba a evitar este tipo de transferencias del agro a la industria, haciendo que los productores agrarios percibieran el precio lleno por la exportación de sus productos, que los impuestos se redujeran al mínimo y sean iguales para todos los sectores (sin “discriminaciones”). Por eso exigían una mayor racionalización del aparato estatal y el saneamiento de la industria nacional, que eliminara progresivamente a los sectores ineficientes. Esa era la forma concreta que adquiriría el “restablecimiento de la rentabilidad de la explotaciones agropecuarias”: concentración y centralización del entramado industrial, achicamiento del Estado, desocupación y bajos salarios.

Más allá de las diferencias frente a problemas puntuales, todas las corporaciones agrarias compartían el objetivo de defender la renta frente a los intentos de apropiación de otras fracciones. No importaba si ésta se destinaba a financiar la burocracia estatal, una industria ineficiente e incapaz de competir, o el nivel de vida que la clase obrera obtuvo bajo el peronismo. Las cuatro corporaciones coincidían en la defensa de un supuesto derecho a apropiarse para sí de esa riqueza. Y de ahí sus reclamos: había que racionalizar el Estado, despedir empleados, contraer los salarios reales y los gastos sociales. Un programa impopular, opuesto a cualquier forma de reformismo. Y si algún

sector de la clase obrera osaba discutir esa forma de repartir la riqueza social, solicitaban inmediatamente el reestablecimiento del orden y la disciplina (que era la fórmula eufemística para pedir represión), como hicieron bajo el gobierno de Illia. Ese programa era el que se venía expresando en cada intervención pública y en cada demanda de las corporaciones agropecuarias. Y era el programa implícito de cada una de las intervenciones futuras, que a partir de este momento serían formuladas conjuntamente, y con fluida periodicidad, a través de la flamante Comisión de Enlace. Un programa que ubicaba en el Estado la raíz de todos los problemas, sin identificar el proceso más general que explicaba la crisis del sector y del capitalismo argentino: la caída en los niveles de renta agraria, que otrora habían sostenido un desarrollo que ya no era viable en las nuevas condiciones. He aquí el único programa liberal, que ningún sector de la burguesía industrial estaba en condiciones de defender.

La unidad como ariete de la contrarrevolución

La Comisión de Enlace no logró sortear la compleja coyuntura que derivó en el retorno de Perón, del exilio a la presidencia. El ascenso de la lucha de clases y el ciclo insurreccional abierto en 1969, que daba cuenta de la apertura de un proceso revolucionario,¹⁹ modificaron sustancialmente el mapa político en que había surgido y terminaron operando en su disolución. El primer efecto del ascenso de la conflictividad social fue la reapertura de una crisis política que rápidamente derivó en crisis de régimen. Descomprimir esa situación social explosiva demandó, en primer lugar, el recambio de las principales figuras en el gabinete de Onganía. Luego el propio presidente tuvo que abandonar el poder en medio de un golpe interno, y pocos meses después también salió de escena su sucesor, en iguales circunstancias. El tercer presidente de la Revolución Argentina, Lanusse, se vio obligado a convocar nuevamente a elecciones, pero permitiendo esta vez la

¹⁹Una caracterización más detallada de los sucesos de 1969 como expresión de la apertura de un proceso revolucionario puede encontrarse en: Marín, Juan Carlos: *Los hechos armados. Un ejercicio posible*, La Rosa Blindada/PICASO, Buenos Aires, 2003; Izaguirre, Inés y colaboradores: *Lucha de clases, guerra civil y genocidio en la Argentina 1973-1983. Antecedentes. Desarrollo. Complicidades*, Eudeba, Buenos Aires, 2009; Portantiero, Juan Carlos: "Clases dominantes y crisis política en la Argentina", en Braun, Oscar: *El capitalismo argentino en crisis*, Siglo XXI, Buenos Aires, 1973; y Balvé, Beba y Beatriz Balvé: *El '69. Huelga política de masas*, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2005, entre otros.

presentación del peronismo y el retorno de su líder del exilio. De esa forma, la clase dominante buscaba recomponer los lazos materiales e ideológicos con los explotados, que amenazaban con volcarse masivamente detrás de alternativas políticas revolucionarias. De hecho, buena parte de la burguesía impulsó la transición democrática (las corporaciones industriales -UIA y CGE-, junto a los partidos políticos que avalaron previamente la proscripción y parte de las FF.AA.) La fuerza que adquiriría la alternativa reformista encarnada en el peronismo hacía mella a su vez en el frente agropecuario, que se dividió ante la alternativa que se abría. La primera en abandonar el frente fue FAA, secundada por CONINAGRO, que veían en la alternativa peronista una doble conveniencia. En primer lugar, y como su dirigencia expresó en más de una oportunidad, las concesiones hacia las masas que impulsaba la alternativa reformista eran una necesidad política para reencauzar las tendencias insurreccionales dentro del sistema. El fantasma de la revolución social reaparecía y solo el retorno de Perón era capaz de conjurarlo. Por otro lado, el peronismo hacía propios algunos de los reclamos de las bases de Federación Agraria, como la segmentación de la carga impositiva o frenar el proceso de concentración que las afectaban.²⁰ De esta manera, aunque el agro aparecía como candidato a financiar el programa peronista, las capas más chicas intentaban contribuir a ello en menor grado que sus pares de mayor tamaño. Pero no solo los “chacareros” se sumaron a la alianza peronista. Sectores internos de SRA, CARBAP y CRA también terminaron respaldando al nuevo gobierno por distintas razones.²¹

En primer lugar, hay que destacar que la ofensiva arrolladora del peronismo no dejaba mucho lugar a alternativas, ni por derecha ni por izquierda. Ante ello, muchos agacharon la cabeza y se limitaron a intentar subirse al carro de los vencedores, aunque más no sea para arrancar desde allí algún beneficio, o para intentar frenar desde adentro el apetito recaudador del peronismo. Además, no se podía negar que ante el peligro encarnado en la revolución social, el peronismo podía ser una alternativa de contención o incluso, un mal menor. A su vez, una coyuntura signada por el aumento de los precios internacionales

²⁰Ejemplos de estas posiciones pueden encontrarse en los editoriales de *La Tierra*, 24/1/1972, 4/5/1972, 30/3/1972 y 20/4/1972.

²¹La línea interna filo-reformista en SRA se expresó con mayor fuerza en la lista opositora a las elecciones de 1972 (Ver: *La Nación*, 1/9/1972 y 24/9/1971). En el caso de CRA y CARBAP, se expresó en desavenencias internas a lo largo de 1973 y 1974, en relación a las iniciativas impulsadas por el gobierno (Ver: CARBAP: *Memoria y Balance 1973-1974*).

de los bienes agropecuarios, que elevaba sustancialmente los ingresos de la burguesía terrateniente, relativizaba el efecto de las iniciativas oficiales para elevar los montos de renta agraria captada y redistribuida desde el Estado.²²

Estas alternativas reavivaron los enfrentamientos en el interior de la burguesía terrateniente agraria, tanto entre corporaciones como hacia el interior de las mismas. Entre 1973 y 1974, primaron los diferencias entre los que defendían la experiencia peronista, o simplemente preferían no pasar a la oposición abierta; y entre quienes, levantando el programa de la Comisión de Enlace, denunciaban con creciente virulencia el aumento en los niveles de renta captada por el Estado y la dilapidación de recursos en una burguesía industrial ineficiente y en medidas “populistas” de subsidio al consumo. Sin embargo, en unos pocos meses la coyuntura volvió a transmutar, generando condiciones que posibilitaron, una vez más, la confluencia de las cuatro corporaciones de la burguesía terrateniente pampeana. Esta vez esa unidad se manifestó en la confluencia tras la alternativa golpista que instauró, en 1976, el Proceso de Reorganización Nacional.

Desde fines de 1974, comenzaron a operar una serie de factores que distanciaron a ciertas corporaciones del oficialismo. En primer lugar, la caída internacional de los precios ganaderos, que acentuaron las dificultades económicas de ciertas capas burguesas. A esto se sumaba una “ofensiva recaudadora” con iniciativas en materia impositiva que no distinguían claramente entre la burguesía agraria chica y grande. Ya sobre el final de año, aparecieron las primeras dificultades derivadas de la crisis económica internacional. Frente a ello, reaparecía en el horizonte el peligro de un desequilibrio de la balanza de pagos y del presupuesto, que obligaba a mantener los niveles de recaudación aún ante el desbarranco de los precios internacionales de todas las mercancías agropecuarias. El cambio en la orientación económica sobre el final del año, y el abandono de las iniciativas reformistas que eran impulsadas por un sector interno de Federación Agraria, eliminaron el último factor que mantenía a esta corporación bajo el paraguas reformista, y la lanzaron, junto al resto de las corporaciones, a una acción opositora unificada.

Una gran agitación se vivió en los primeros meses de 1975, cuando las bases de FAA lanzaron distintas medidas de fuerza en oposición

²²Un análisis del aumento excepcional de la renta entre 1972 y 1974, y su derrumbe en 1975, puede verse en Iñigo Carrera, Juan: *La formación económica de la sociedad argentina*, Imago Mundi, Buenos Aires, 2007.

a la política agropecuaria oficial. Entre enero y febrero, se realizaron en total ocho paros regionales, impulsados por organizaciones de base que recibieron el respaldo de FAA. Por otro lado, en los convulsivos meses finales de 1974, a instancias de CARBAP se había lanzado un nuevo frente agropecuario que reunía a SRA, CRA y CONINAGRO. Unidos por la prédica anti-reformista, y las críticas a los altos niveles de exacción de renta impulsados por el gobierno, este frente, denominado Comité de Acción Agropecuaria, vio peligrar su construcción ante la ofensiva de FAA. Ante la agitación creciente de los chacareros, lanzó un paro agropecuario nacional para el 3 de marzo. Esta medida, absolutamente excepcional, marcó la tónica del período que se abría. A lo largo del año, se realizarían cuatro paros nacionales más, cada uno de mayor extensión que el precedente. Hacia la segunda mitad del año, esos paros acompañarían una ofensiva más general de ciertos sectores de la burguesía, que capitaneados por la dirigencia de CARBAP, apuntaban a clausurar el régimen democrático mediante un golpe que pusiera fin a las tendencias insurreccionales en las masas y restituyera el orden.²³

Federación Agraria fue un engranaje central de esa ofensiva. Desde abril del '75, ante la vacilación de ciertas corporaciones, no dudó en trazar un nuevo frente con CARBAP, que sería el impulsor de la avanzada golpista. Ese frente convocó y garantizó los paros agrarios del '75, y ofició como vanguardia a la que se fueron sumando paulatinamente el resto de las corporaciones agrarias y, posteriormente, otras corporaciones empresarias. Aunque Federación Agraria se marginó de la entidad que canalizó la ofensiva golpista luego del "Rodrigazo", la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), adoptó una actitud prescindente que en la práctica allanó el camino de quienes buscaban clausurar la institucionalidad.²⁴ De esta manera, volvió a coincidir detrás del mismo programa y con los mismos aliados con quienes había armado la Comisión de Enlace en 1970.

La unidad se estructuraba en torno a la "defensa" de la renta agraria, que el Estado capturaba para sostener un entramado industrial ineficiente y sostener el nivel de vida de las masas. Sin esas transferencias,

²³Hemos desarrollado este tema en Sanz Cerbino, Gonzalo: "Tiempos violentos. Los paros agrarios de 1975 y la estrategia golpista de la burguesía", en *Anuario CEICS*, n° 3, 2009.

²⁴Este tema se desarrolla en profundidad en Sanz Cerbino, Gonzalo: "El huevo de la serpiente. La Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias y el golpe de Estado de 1976", en *Realidad Económica*, N° 251, abril-mayo de 2010.

el Estado se vería obligado a recortar sus gastos, eliminar personal, servicios públicos y subsidios al capital. La consecuencia evidente era el aumento de la desocupación a escalas impensadas y una abrupta caída de los salarios reales. Aquello que había intentado conquistar Celestino Rodrigo, y que se había abortado por la resistencia que las bases obreras estructuraron, canalizada por fuera de las estructuras sindicales tradicionales, en las Coordinadoras Interfabriles.²⁵ Por esa razón, la aplicación del programa solo podría obtenerse sobre la base de una represión de una escala nunca antes vista, clausurando mediante un golpe la vigencia de las instituciones democráticas que obstaculizaban su concreción. Esa tarea fue asumida finalmente por las Fuerzas Armadas, que se alzaron con el poder en marzo de 1976. La alternativa fue promovida e impulsada por el conjunto de la burguesía nacional, que se había ido sumando, desde fines de 1975, a la ofensiva golpista capitaneada por la burguesía agropecuaria. Una ofensiva que había comenzado por impulso de las corporaciones rurales otrora enfrentadas, representantes de los chicos y de los grandes, de la “oligarquía” y de los “chacareros”. Una unidad que ni siquiera era nueva en 1975, cuando contaba con vastos y documentados antecedentes. Menos aún en 2008, en donde esa confluencia solo puede sorprender a quienes desconocen la “historia negra” de Federación Agraria, a cuya reconstrucción intentamos contribuir en este artículo.

Recibido: 25/9/2012 - Aceptado: 30/11/2012

²⁵Sobre este tema ver Löbbeck, Héctor: *La guerrilla fabril. Clase obrera e izquierda en la Coordinadora de Zona Norte del Gran Buenos Aires (1975-1976)*, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2009.